



El Aromo

UNA PUBLICACIÓN DE VÍA SOCIALISTA

Dos futuros, dos países posibles



Un país al borde del precipicio



Fabián Harari
Editor Responsable



El cimbronazo financiero mundial, que se llevó puestos a tres grandes bancos norteamericanos y al segundo banco de Suiza, solamente ratifica aquello que cualquier especialista no deja de señalar: la economía mundial está en un proceso de lenta pero inexorable tendencia a la caída, desde hace décadas. Cinco, para ser exactos. Un período que supera, con creces, el ascenso de posguerra. Solo por tomar los años recientes, el rescate del 2001 no impidió la caída del 2008. Ni el escandaloso rescate de ese año, otra caída en 2018. Y, ahora, la que estamos viendo. Lo que uno debería responder, a esta altura, no es por qué aparecen estos episodios, sino cómo es que todavía no se produjo un derrumbe similar (o mayor) al de 1929, ni vemos esos enfrentamientos militares a gran escala que provocó. Lo cierto es que la “esperanza” que despertaba la economía china, como posible locomotora del desarrollo, mostró rápidamente sus límites. Desde su propia crisis en 2014, las “tasas chinas” se redujeron a la mitad y esta potencia todavía no pudo desplazar del primer lugar a un EE.UU en decadencia.

Esta recaída económica tiene como elemento desencadenante el choque

Sumá tu apoyo

Vía Socialista es un partido con una propuesta concreta de gobierno para llevar adelante y que es resultado de muchos años de trabajo. Se llama Argentina 2050. Con este programa aspiramos a un país que vuelva a crecer y alcance una productividad coreana y un nivel de vida sueco.

No buscamos una candidatura testimonial de oposición ni queremos apenas instalar un legislador o una figurita pública. Por el contrario, consideramos que podemos gobernar y llevar adelante un programa socialista que desarrolle el país. Así, planteamos que el socialismo es posible, ahora.

Para llevar esta propuesta a las próximas elecciones, necesitamos conseguir la legalidad como partido. Para eso necesitamos, sobre todo, afiliaciones. Podés hacerlo directamente online en el siguiente link:

<https://viasocialista.com.ar/afiliacion/>

Podés descargar gratuitamente nuestro programa Argentina 2050: <https://viasocialista.com.ar/category/argentina-2050/?fbclid=IwAR2FelKZ0u-V0Db34x8uSkMO4SsT-L9oUkUNmrjXSAWDz-TKXTneIoOeK8UQIc>

El Aromo
Nueva Epoca. Año I, nº 9. Marzo 2023.
Buenos Aires. ISSN: 1851-1813.

Editor Responsable: Fabián Harari.

Diseño de interior: Luciano Martin.

Diseño de Imagen: Leandro Albin.

Equipo Editorial: Eduardo Sartelli, Marina Kabat, Romina De Luca, Rosana López Rodríguez, Ianina Harari, Nicolás Villanova, Mariana Fennema, María del Rosario Toro Tesini, Maximiliano Lescano, Gonzalo Sanz Cerbino, Hernán Calisaya, Dolores Martínez González, Damián Bil, Roberto Muñoz, Nicolás Grimaldi, Martín Pezzarini.

Redacción: Salcedo 2654, CABA, CP: 1259.

Contacto: argentinasocialista2050@gmail.com

entre la inflación norteamericana y las tasas de interés. La inflación es un síntoma de una crisis que afecta a las ganancias en el seno de la producción, no un problema meramente monetario. A ese problema se lo enfrentó con el “calentamiento” de la economía, vía emisión, rescates, subsidios, etc. Como eso no resolvió el problema, el resultado fue, de nuevo, la inflación. Para contrarrestarla, se apeló al efecto “enfriamiento”, vía suba de tasas de interés, que “sincera”, a la baja, el precio de los bonos más antiguos del tesoro norteamericano, provocando el cimbronazo que vimos. Tras cartón, las dos recetas: rescate y suba de tasas...

Los analistas salieron a aclarar que las quiebras fueron producto de una cartera muy riesgosa de ciertas entidades (pocas empresas, con mucha necesidad de financiamiento: las startup). Sin embargo, en el caso del SVB, el 60% de su balance lo tenía fuera del “casino”, en bonos del Tesoro. Es decir, su estrategia era bastante “conservadora”. Lo que le falló fue el propio respaldo del Estado. Por eso, esta crisis, por pequeña que se muestre, evidencia un quiebre en la columna que hoy sostiene el sistema mundial. Entre otras derivaciones, China tiene gran parte de sus reservas en esos bonos, ¿hasta qué punto su desvalorización puede afectarla? Más allá de la respuesta inmediata, estamos ante un proceso que lleva a un desbarranque generalizado. A todo este escenario, hay que agregar la espiralización del conflicto armado en Ucrania que, poco a poco, va involucrando a contendientes más importantes.

Aquí, la Argentina tiene su propia crisis, de larga data, que va descendiendo a nuevos círculos infernales en cada episodio. El gobierno de Cristina y su ministro tienen al país al borde de una híper, con una inflación anualizada del 102% (y una proyección a febrero 2024 del 120%), una pobreza cercana al 50% y los servicios públicos colapsados. Este año, se proyecta una caída de entre 2 y 3 puntos del PBI y una merma fiscal (en relación al 2022) de alrededor de 8.000 millones de dólares, solo en concepto de la sequía. O sea, no es cierto que hay un ajuste que “se viene”. El ajuste llegó hace rato. Pero, como vimos arriba, el horizonte es mucho más negro.

Si bien todas las miradas se posan en Alberto, lo cual resulta lógico, el timón del gobierno todavía reside en Cristina. Ella puso a Sergio y él consulta sus movimientos con ella. Por eso, a ella le cuesta tanto salir en público a criticar abiertamente el plan económico, y por eso nunca se refirió a su ministro (como sí lo hizo con Guzmán). Su gente controla las empresas públicas (salvo Aysa). Con respecto a Edesur y los cortes, habría que aclarar que la interventora del ENRE hasta agosto del año pasado, fue Soledad Manín, del riñón de Federico Basualdo, y que se la reemplazó por Walter Martello (massista), con el aval de Cristina. En este ente, la mayoría de funcionarios fueron designados por Axel Kicillof. ¿Dónde estuvieron todo este tiempo? Debe tenerse en cuenta que esta gente manejó la política energética durante 16 de los últimos 20 años. Entre otros “deslices”, permitieron que Edesur y Edenor acumularan deudas siderales con CAMESA, estafando al Estado. Siguiendo con las entidades controladas por el kirchnerismo “duro”, tenemos a la ANSES, la AFIP, el BCRA, la caja de la Provincia de Buenos Aires (entre otras provincias), varias intendencias (Avellaneda, La Matanza, Quilmes) y el Ministerio del Interior. O sea, los recursos financieros más importantes. Por lo tanto, otra vez, el intento de ella y Máximo de correr como “oposición” es una broma de muy mal gusto. Hace dos semanas, se realizó un cónclave entre ella, Sergio y Axel, para diseñar las nuevas medidas económicas. El resultado es este escandaloso “canje” que nos pone al borde de otro corralito.

La nueva medida de “pesificación” de los activos de los organismos públicos es una jugada desesperada y peligrosa. Obliga a la ANSES a vender sus bonos en dólares, con legislación argentina, al mercado local (bancos y compañías de seguros) a cambios de pesos, para que estos puedan realizar operaciones de “contado con liqui”. Esos bonos, la ANSES los debe vender al 25% de su valor, aunque luego el Tesoro deba rescatarlos por el 100% y aunque Massa los haya “recomprado” al 35%. Esos pesos recaudados, los organismos tienen que girarlos al Tesoro. A a todo esto, se les permite a esas entidades privadas girar el 40% de sus dividendos al exterior. En una segunda instancia, esos organismos públicos deben vender sus bonos en moneda extranjera, pero con legislación internacional, al Tesoro, que paga esos bonos en pesos (con los mismos pesos que recibió de la primera venta) y luego los “deslista” (es decir, los saca de plaza), para mantener su cotización

y evitar que se derrumben. O sea, una confesión de la propia insolvencia. Estamos ante el desguace de lo que queda para ver si se llega a los meses que faltan. En concreto, se trata de quitarle al ANSES y a los bancos públicos sus activos en dólares para pesificarlos. Eso no sólo es dejarlos sin respaldo, sino cambiar la naturaleza del acreedor, que pasa del propio Estado a los privados, los cuales consiguen obligaciones en dólares al 25% de su valor. Queda claro que el gobierno no puede colocar deuda en pesos a largo plazo. Entonces, coloca deuda vieja en dólares a una tasa sideral que está calculada entre el 25% (para los más optimistas) y el 45% (los más pesimistas). Para entender la envergadura del problema, la Fed subió la tasa al 5%, en un hecho histórico, Macri se endeudó al 7% y Néstor a la “escandalosa” tasa del 15%. Además, estamos ante de la disolución de facto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FSG), organismo que concentraba recursos en dólares, en principio derivados de los activos de las AFJP. Es paradójico que el propio creador de ese fondo, allá por 2008, sea el que lo termina liquidando. La medida es peligrosa porque deja a las últimas cajas públicas sin instrumentos en dólares. Después de esto, solo queda la confiscación de depósitos y un Rodrigazo. Sergio quiso entrar como el Fernando H. Cardoso argentino y probablemente termine como el Jesús Rodríguez del peronismo.

Para evitar ese final de ciclo (y de su carrera política) es que Massa está evaluando su salida. La información habla de la alternativa de un “retiro académico” hasta las próximas elecciones. Con todo, algo queda claro: con estos números no puede ser candidato. El hecho de haber salvado el incendio de julio del año pasado ya quedó atrás. Eso habría sido un capital político notable si las elecciones hubiesen sido en noviembre. El problema es que tampoco puede irse tan fácilmente, porque provocaría inmediatamente la debacle que intenta eludir. Hoy, la candidatura a presidente de la coalición gobernante exige, antes que algo de ambición, una vocación sacrificial. Las elecciones que realmente le importan son las locales. Por eso, por ahora, Scioli puede probarse ese traje (y, por qué no, Alberto...).

El problema del kirchnerismo, es muy otro: cómo retener el bastión de la provincia de Buenos Aires en un escenario de descomposición de la propia fuerza. Máximo se enfrenta a Axel. Larroque se va de La Cámpora y funda su propio partido. La crisis de Alberto no acerca al Movimiento Evita. Cristina perdió el Senado, producto de que ya no controla a las provincias peronistas. Massa, como vimos, amaga con irse...Lo más curioso del asunto es que ni siquiera el ascenso de Milei parece resucitar a la Jefa, sino más bien darle aire a las opciones “moderadas” de ambos lados (Schiaretti y Larreta), pero también envalentona a quienes intentan quedarse con ese electorado. De allí que los “halcones” del PRO hayan logrado romper al radicalismo con la aparición del “Grupo Malbec”.

Pocas veces se ha visto en la historia argentina tamaña paradoja: la descomposición de un elenco político que tiene, sin embargo, un mismo programa para actuar luego del derrumbe: el descenso hacia escalones impensados de explotación y de niveles de vida de la población, como precio a pagar para mantener alguna “estabilidad”. Eso, en el mejor de los casos, porque todo puede salir mal y, entonces, vamos a la anomia, al desmembramiento del país y a la ausencia de la vida social medianamente humana.

Esta década va a jugarse el destino de la Argentina, un país que va hacia su desaparición. Su rescate no puede ser declamativo. No puede ser oponerse a tal o cual ajuste. Solo puede hacerse con un plan concreto que piense de otra forma el desarrollo y que apele a otro sujeto social. No a la burguesía nacional, aquella que lideró esta experiencia desgraciada, sino a la clase obrera, aquella que viene soportando cada embate y sostiene lo poco que tenemos. O sea, nosotros mismos, los obreros y obreras. Un nuevo sujeto y un nuevo plan para implementar ya. Y un nuevo instrumento: un movimiento, Argentina2050. Para que esta década no se nos escape.

El inicio de un debate necesario

Un balance de las Jornadas Argentina 2050



Romina De Luca, Gonzalo Sanz Cerbino e Ianina Harari
Vía Socialista



Entre el 9 y el 12 de marzo se realizaron en CABA las “Jornadas Argentina 2050. ¿Qué país queremos en 30 años?”. Organizadas por el Movimiento Argentina 2050 -que integra Vía Socialista, entre otros. El evento contó con adherentes como ATE, ATE-Cultura, el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS), el Grupo de Trabajo “Izquierdas y luchas sociales en América Latina” de CLACSO y el Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina (INDEAL) de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Fueron cuatro días y 42 mesas en la sede central de ATE nacional.

Organizamos estas jornadas con el objetivo de comenzar a discutir los grandes problemas de la Argentina, convocando a dirigentes sociales y políticos, técnicos y especialistas, para debatir cómo reconstruimos un país asolado desde hace décadas por la crisis, la miseria y la desocupación. Para discutir un futuro para el país, que pueda garantizar una buena vida para cada uno de sus habitantes.

Diagnósticos...

Más de 100 intelectuales, dirigentes sociales y políticos, técnicos e investigadores, periodistas y activistas debatieron en nuestras jornadas sobre el futuro del país. No en un sentido abstracto, sino muy concreto. En efecto, las Jornadas fueron escenario de debate y reflexión sobre las causas de los problemas que hacen que el país expulse población y someta al conjunto a la degradación de la economía, de la salud, de la educación, del medio ambiente, es decir, de la vida misma. En síntesis, se analizó la crisis económica y social que asola a nuestro país hace décadas. Pero el debate no se detuvo en los diagnósticos, sino que avanzó en la discusión de propuestas para la superación del actual estado de cosas.

A lo largo de estos cuatro días, en distintas mesas, se debatió sobre los problemas de las mujeres obreras, la naturaleza de la crisis económica, las alianzas políticas posibles tanto a nivel sindical como en un marco político más general poniendo sobre la mesa el protagonismo de la clase obrera y las potencialidades del socialismo. Se debatió sobre la organización del territorio nacional, el desarrollo de los recursos naturales con que cuenta el país, las formas de superar la crisis energética, la naturaleza de la inflación, los problemas de la vivienda y del Conurbano bonaerense, la coyuntura mundial y latinoamericana, los problemas de la educación argentina (a nivel de alfabetización inicial, de políticas públicas, de la escuela secundaria), la universidad y el sistema científico, el problema del desempleo, de la tercera edad, las reformas laborales, las condiciones de salud, el trabajo precarizado, las empresas estatales, la planificación económica, los problemas medioambientales, las relaciones exteriores, entre otras.

A lo largo de estos intensos cuatro días participaron de los debates Víctor De Gennaro, Claudio Lozano, Marcelo Rougier, Federico Fagioli, Agustín Salvia, Eugenio Semino, Waldo Ansaldi, Miguel Ángel Forte, Pablo Bonavena, Daniel Campione, Pablo Pozzi, Claudio Katz, Bernardo Kosacoff, Nicolás Grinberg, Juan Carlos Hallak, Magui Belloti, Marta Fontenla, Miguel Angel Barreto, Guillermo Garaventa, Ariel Pennisi, María Elena Barbagelata, Susana Vior, Mariano Narodowski, Guillermina Tiramonti, Anibal Blanco, Hugo Palamidessi, entre otros. El cierre de las jornadas, un homenaje a Salvador Allende a 50 años del golpe en Chile, contó con la participación de Joan Garcés, Igor Goicovic Donoso y Eduardo Sartelli.

Muchos de estos paneles, como el de crisis económica, tuvieron como protagonistas a las mismas personas que se reunieron a debatir estos temas a principios de los 2000 en las jornadas organizadas por el CEICS y Razón y Revolución. En ese sentido, luego de más de 20 años desde el Argentinazo, se pudo debatir sobre las conclusiones de la trayectoria que trazó el ascenso y caída de los llamados gobiernos populistas y, en especial, de las ilusiones que en ellos depositaron distintos sectores.

...Y soluciones

El principal objetivo de estas jornadas no era simplemente reunirnos a lamentarnos sobre lo mal que está el mundo, sino debatir propuestas superadoras que tengan por objetivo poner fin a la decadencia y mejorar la calidad de vida. En ese sentido, las Jornadas fueron un llamado no solo a discutir aspectos parciales de la vida social, sino también un proyecto global. Ello supone, debatir cuál es el sujeto capaz de dirigir un cambio estructural y planificar otro rumbo.

Es claro que el estado de crisis no puede explicarse sin poner sobre la mesa el sujeto que explica esa debacle: el agotamiento de la burguesía como clase capaz de desplegar el destino de nuestra sociedad. Se trata de una clase sin ninguna potencia para relanzar la economía que solo se reproduce en base a los negociados con el Estado. Esa burguesía choriplanera demuestra su inutilidad en cada uno de los aspectos de la vida social. Es por ello que el interrogante ¿qué país queremos en treinta años? consistía en una invitación a pensar cuál es el país deseable desde el punto de vista de la clase obrera, y a pensar un programa factible y real para alcanzarlo, sin mesianismos ni milenarismos.

La naturaleza de la etapa política resulta fundamental para pensar las tareas que de ella se desprenden. La clave está dada por la fuerza que cobra el consenso liberal, al que se sumó un kirchnerismo quebrado, agotado y cada día más abroquelado en su ala derecha (lo que incluye, y no puede ser de otra manera, a Cristina Fernández de Kirchner). Frente al fracaso de las recetas “populistas” y “gradualistas”, se va instalando, de la mano de las fuerzas políticas dominantes, que la única salida a la crisis argentina pasa por reeditar soluciones que suponen profundizar el ajuste sobre los explotados (reforma laboral, reforma jubilatoria, reforma del estado), aumentando aún más la explotación y la miseria de la clase obrera. Una receta que no sacará a la Argentina del pozo, pero que le dará aire a la burguesía planera a costa de una mayor degradación de la vida para los trabajadores. A este panorama oscuro contribuye lo que denominamos la “izquierda milenarista”, que en lugar de poner sobre la mesa un programa para dirigir los destinos de la sociedad, se aboca a discutir cuestiones menores sin mostrar vocación de poder. Ello forma parte de los obstáculos a superar.

Frente a este panorama, la propuesta que pusimos a debate en distintos paneles desde Vía Socialista, consistió en la formación de una fuerza política que excluya a quien nos trajo hasta aquí, la burguesía argentina. Un gran partido laborista, con dirección obrera, que permita reagrupar a todos los trabajadores, para discutir en su seno las distintas alternativas para superar este estado de cosas. Con esta propuesta interpelamos en particular a quienes se ilusionan una y otra vez con la alianza con alguna fracción burguesa. Por ejemplo, quienes se ilusionaron con el Frente de Todos, que ya ha demostrado, tras casi tres décadas de co-gobernar con Juntos por el Cambio, que no tiene nada bueno que ofrecer a los trabajadores.

También se puso a debate, en mesas como “Desafíos de un gobierno socialista en una sociedad capitalista”, “Desarrollo industrial y planificación económica” o el panel de cierre en homenaje a Salvador Allende, cómo poner en marcha las transformaciones estructurales necesarias para superar una crisis que se arrastra hace más de siete décadas en ausencia de un proceso insurreccional. En ellas se debatieron los desafíos para avanzar hacia el socialismo y para instrumentar una verdadera planificación económica, en un contexto signado por la lucha electoral en los marcos de la democracia burguesa.

La construcción de un programa de intervención concreto requiere del debate político pero también del aporte de técnicos y especialistas para accionar ahora, en esta coyuntura. A lo largo de las Jornadas estuvieron presentes en distintos paneles y conversatorios, donde pudimos escuchar los aportes de distintos especialistas en las más variadas temáticas: desde cómo enfrentar la crisis energética o las potencialidades de la energía nuclear, hasta la posibilidad de desarrollar actividades basadas en recursos naturales (la piscicultura, la floricultura o la minería del litio) que permitirían aumentar de forma rápida las exportaciones del país y así generar recursos económicos para afrontar cambios estructurales más profundos, en especial desarrollar ramas de mayor tecnología en manos del Estado que puedan competir a nivel mundial con una productividad elevada. Las propuestas para enfrentar la crisis educativa, el problema de la vivienda o la pobreza también tuvieron lugar en varias mesas en las que participaron especialistas.

Las Jornadas dejaron la necesidad de continuar con los debates. Por eso, fueron apenas la primera de una serie de actividades similares, que aspiramos a poder realizar todos los años. El evento mostró la necesidad de avanzar en reagrupamientos, la formación de espacios de acción que den lugar a distintas iniciativas concretas que surgieron y que daremos a conocer en las próximas semanas. A su vez, todas las charlas fueron grabadas y pronto serán subidas a nuestras redes, por lo que estarán disponibles para que puedan seguir los debates quienes no pudieron asistir. Las jornadas fueron un espacio de discusión rico y fructífero, para debatir un futuro mejor para una Argentina que, así como va, camina hacia el abismo.

¿Achicar o agrandar el Estado?

Una crítica a la solución liberal para el desempleo



Nicolás Villanova
Vía Socialista

El problema del empleo en Argentina se mantiene en pie. Aun cuando algunos indicadores parecerían mostrar síntomas de estabilidad y crecimiento en el mercado de trabajo (recuperación del empleo registrado y caída de la tasa oficial de desocupación), lo cierto es que la existencia de más de 5 millones de obreros en la informalidad, los 1,3 millones de beneficiarios que perciben el Potenciar Trabajo, más el millón y medio de personas que no tienen trabajo, y que lo buscan activamente, muestra la persistencia de la crisis del empleo. Hoy, el consenso liberal gana terreno y propone como solución el pasaje de todos los “planeros” al sector privado. La misma opción ofrece para el empleo público. Pero ¿puede resolver el problema del desempleo el sector privado aun con la “ayuda” estatal que propone el consenso liberal, por la vía de la eliminación de los impuestos o la reducción del gasto social? Lo dudamos...

¿Contra quién resurge el consenso liberal? Evidentemente, con la fórmula que halló el kirchnerismo a la crisis del empleo hace dos décadas, ya no para resolver el problema del desempleo, sino para contenerlo. En efecto, la insurrección de diciembre de 2001 marcó un quiebre en la relación política entre la burguesía y el proletariado, sobre todo con la fracción desocupada de la clase obrera. El régimen político fue cuestionado y con él toda la institucionalidad burguesa. La crisis política tuvo como trasfondo la crisis social, con millones de desocupados en las calles. En ese contexto, el kirchnerismo tuvo que pensar qué hacer con los desocupados los cuales, en ese entonces, sumaban según las estadísticas oficiales unos 2,3 millones y según nuestras estimaciones, no menos de unos 6,7 millones. Para ello, el gobierno entrante elaboró un conjunto de estrategias para contenerlos económica y políticamente, es decir, evitar que los desocupados se mueran de hambre, impedir potenciales rebeliones y consolidar, a través de la cooptación, una base social propia. Un proceso iniciado por el kirchnerismo y continuado luego por el macrismo.

El resultado de las medidas implementadas fue la estatización de la sobrepoblación relativa, es decir, la integración al Estado de esa masa de desocupados abiertos y encubiertos, pero sin hacerse cargo de una solución real del problema del desempleo. Una parte de esa población fue contratada bajo la forma de empleo público docente, administrativo y de seguridad. Sobre todo, mucho empleo improductivo estatal. Otra fracción también fue contenida por el Estado, aunque descentralizada, en el armado de cooperativas gestionadas por los movimientos sociales y por las intendencias, en actividades superfluas y subsidiadas. Otras fracciones de la clase obrera más envejecidas y vulnerables fueron beneficiadas por las moratorias de jubilados o a través de las pensiones no contributivas, con el objetivo de tapar el desempleo. Este proceso dio lugar, por un lado, a la administración de la miseria de las políticas sociales a través del cooperativismo, la superexplotación de obreros y su empleo a bajo costo para tareas descentralizadas por el Estado; y, por otro lado, al uso político de los desocupados, algunas veces bajo la forma de clientelismo, otras, como fuerza de choque (como el caso de Milagro Sala en Jujuy). Ahora bien, ese proceso de estatización de la población sobrante requiere de mucha plata y, por lo tanto, resulta oneroso para la burguesía, razón por la cual, luego de varios años sin resolver el problema del desempleo, en la actualidad se ha ido forjando ese consenso liberal que busca “sacarse de encima” la cuestión de los desocupados en general y de los planes sociales en particular, es decir, que el Estado no se haga cargo de la contención social, o bien, que su financiamiento se reduzca al mínimo posible.

El consenso liberal resurge entonces como una propuesta de solución a la crisis económica en general y al problema del desempleo en particular. Si el kirchnerismo impuso como solución a la crisis del 2001, mediante la estatización de la población sobrante, sin crear empleo productivo y sin modificar la estructura de la economía argentina (reproduciendo los elevados niveles de pobreza e indigencia), el consenso liberal se yergue sobre este fracaso e impulsa su contrario, a saber: el achicamiento del Estado por la vía de la reducción del gasto público y los impuestos. Aquí veremos en qué consiste la propuesta liberal, qué es lo que se viene llevando a cabo y sus limitaciones.



El diagnóstico liberal

A grandes rasgos, el planteo liberal sería más o menos así. La crisis económica es una crisis del Estado (o por acción de éste) y, por efecto, del déficit fiscal. O sea, el Estado gasta más de lo que realmente ingresa a las arcas fiscales, cuya consecuencia, junto con la emisión monetaria, sería la inflación. Desde esta perspectiva (según Milei), la inflación sería un problema monetario, y no un proceso causado por la escasa productividad relativa del capitalismo argentino en relación con el resto de los competidores mundiales. Por su parte, el sector

privado se vería “asfixiado” para invertir y desarrollar la economía por los elevados impuestos que cobra el Estado para sostener su funcionamiento y los programas sociales y económicos dirigidos a la población en general y a los “empresarios amigos” (léase el presupuesto a la obra pública). La solución liberal redundaría en un “achicamiento” de ese Estado por la vía de la reducción del gasto social y un “traspaso” de las resoluciones del problema del empleo al sector privado, proceso que iría acompañado por las reformas previsional, laboral y tributaria. Todo apunta a frenar y reducir el gasto público, disminuir los impuestos y, consecuentemente, achicar el Estado, para que el sector privado se recupere, logre invertir (con empleo flexibilizado y con menos impuestos que pagar) y emplee a los actuales desocupados, así como también, ofrezca mejores posibilidades salariales a los trabajadores estatales para que éstos cambien de empleo. Probablemente, Milei y Espert sean quienes proponen estas medidas en forma más explícita. Aunque, el macrismo (tanto las “palomas” como los “halcones”) dice más o menos lo mismo. Incluso, el propio Frente De Todos ha planteado algunas de estas medidas como soluciones tentativas para resolver los problemas del déficit fiscal, de cara a las negociaciones por los préstamos del Fondo Monetario Internacional, no sin contradicciones en el seno del frente electoral y con recurrentes peleas internas. Sin embargo, la mayoría de estas propuestas ya están en marcha, en mayor o menor medida, de manera más o menos gradual. En un momento donde la pobreza alcanza a más del 40% de la población, la indigencia, a cerca del 10%, y el desempleo oficial se eleva al igual que el empleo “en negro”, el lanzamiento de mayores medidas de corte liberal no puede sino profundizar esta degradación social, sobre todo cuando no se sabe bien cuál sería el rol supuestamente dinámico del sector privado, pues no hay ninguna estrategia de largo plazo o un horizonte real de transformaciones económicas. Pero, a la vez, de continuar con las tendencias actuales sin modificar casi nada o sin cambiar el rumbo económico, no puede esperarse otra cosa que la profundización de la crisis económica y social, o sea, más desempleo y más empleo precario.

Un aspecto para reivindicar de Milei y los libertarios es que esbozan una propuesta estructural, tipo paquete de medidas, y que se animan a decirlo sin vueltas. Libertad Avanza habla del “plan motosierra”, un conjunto de reformas por etapas, pensado como proyecto de largo plazo para constituir otra Argentina de aquí a unos años. No deja de ser algo tentador y seductor, en un momento donde otras expresiones políticas no divulgan demasiado sus planteos. Además, parece una propuesta coherente. A simple vista, todo encaja, más o menos, pero encaja. Es muy coherente... con los intereses de la burguesía más concentrada. Sin embargo, para la clase obrera, es decir, para el conjunto de la población argentina, la propuesta liberal constituye probablemente la africanización de sus condiciones de vida, aun cuando se indique lo contrario. Y allí donde Milei no encuentra argumentos suficientes para sostener algunas situaciones inviables, entonces apela a los ideales: el cambio moral y cultural de las ideas libertarias te harán creer en que el cambio es posible. Un verdadero mamarracho, porque hablamos de seres humanos concretos.

La reducción del gasto, los impuestos y sus efectos sobre el empleo público

Comencemos por los impuestos. La idea de que los impuestos asfixian a la economía es falsa y no resiste la evidencia empírica. La rebaja de los impuestos es una medida que existe hace varias décadas en Argentina, por la vía del incremento cada vez mayor del empleo “en negro” y las permanentes condonaciones de deudas o las rebajas a las contribuciones patronales, exenciones impositivas en los programas de industrialización, entre otras medidas. Y, sin embargo, esto no evitó procesos hiperinflacionarios o el permanente déficit fiscal como resultado de las arcas del Estado, sino que, contrariamente, tuvo como consecuencia la degradación de las condiciones de vida de la clase obrera. Es más, si tan sólo la burguesía que contrata a obreros “en negro” tributara al Estado todo lo que se ahorra por no pagar aportes sociales y contribuciones patronales no habría déficit fiscal al menos desde 1993 a esta parte, con excepción de los años 2017 y 2020. Por el contrario, habría superávit. Imaginemos por un momento si el Estado cobrara todos los impuestos que no exige a la burguesía y que le perdona bajo diversas acciones, entonces, suponiendo que la causa de la crisis actual fuera el déficit fiscal, en esta parte del mundo no habría problema alguno.

Ahora bien, el consenso liberal propone una rebaja de los impuestos y en simultáneo una reducción del gasto público. Algo que ya se impulsa por lo menos desde el año 2017 a esta parte, pues en términos reales, el gasto social consolidado se redujo entre ese año y el 2020 un 26%. Además, el ajuste fiscal de la administración nacional es notable: entre 2017 y 2022 el gasto social se redujo un 11,6%. Por lo tanto, si la propuesta liberal sugiere la reducción del gasto social entonces debemos señalar que sería una profundización de lo actuado en los últimos años, o bien, un recorte brutal en el fisco. Paralelamente, y casi como por arte de magia, los liberales prometen que no echarían a ningún empleado estatal. Nos dicen que bajarían el gasto público, pero sin costo social alguno. Cabe destacar que, algo de todo esto ya se impulsa en la actualidad. En este sentido, el Frente De Todos, a través del Ministro de Economía, Sergio Massa, puso un freno a la incorporación de nuevos empleados estatales del sector público nacional, lo que significa un límite al empleo público y, consecuentemente, un menor gasto para los años siguientes. Por su parte, la expulsión de beneficiarios de planes de empleo del Potenciar Trabajo en los años 2022 y 2023 va en ese sentido.

La reducción del gasto público tal cual lo proponen los liberales no deja de ser un planteo interesante toda vez que supondría un recorte de una parte del presupuesto dirigido directamente a la burguesía. En este sentido, se propone eliminar a los subsidios económicos, a la obra pública, así como también, el gasto considerado como “robo de la política”. Por ello se reduciría la dieta de los legisladores, disminuiría la cantidad de legisladores y concejales, se eliminarían los fueros

de los políticos y se revisarían los sueldos de los jueces. También se dejaría de pagar los subsidios a las empresas estatales las cuales contratan a unos 60 mil obreros (según datos del 2022). Suena muy interesante, sólo que no se habla de cómo reinvertir ese gasto, sino que iría de la mano de la reducción de los impuestos. Por lo tanto, no sería plata destinada directamente a crear puestos de trabajo productivos, sino que, indirectamente, se esperaría que los empresarios privados, por propia iniciativa, crearan nuevas fuentes de trabajo con los impuestos que dejarán de pagar. Se trata de toda una incógnita porque, en los hechos, y como ya dijimos, a pesar de la reducción de los aportes sociales y contribuciones patronales que se desarrolla desde antaño, las condonaciones de deudas impagas y la evasión fiscal, no hubo creación de empleo sustantivo en el sector privado.

También es cierto que algunos intelectuales del liberalismo, como por ejemplo Roberto Cachanosky, señalan como parte de ese presupuesto correspondiente al “robo de la política” el gasto destinado a las pensiones no contributivas y asistenciales a la invalidez, argumentando que se trataría de un subsidio para intercambiar por votos. Si bien es cierto que la asistencia social genera condiciones de clientelismo político, también es real que esas pensiones van dirigidas a una fracción de la población desocupada. En consecuencia, si se eliminara de cuajo el presupuesto en esas pensiones crecería rápidamente el desempleo.

Pero, una rebaja de los impuestos y del gasto social, ¿acaso no tendría consecuencias directas en el empleo público? Uno de los impuestos que Milei dice que pretende eliminar (entre muchos otros que no menciona explícitamente) es el correspondiente a los ingresos brutos, o sea, uno de los recursos que tienen las administraciones provinciales para financiar, entre otros, los servicios públicos descentralizados por el Estado nacional. Una parte de los salarios de los empleados estatales provinciales se cubre con los recursos que genera ese impuesto, razón por la cual, su eliminación tendría un efecto expulsivo. Del mismo modo, el dirigente de Libertad Avanza menciona que dictaría una reforma en la coparticipación federal, aunque señala que desde su punto de vista habría que eliminarla debido a que muchas provincias “pagan” y otras “gastan”, es decir, hay jurisdicciones que aportan mucho más con recursos propios a la coparticipación y otras que dependen de aquéllos para sus partidas presupuestarias. Es cierto. Incluso, hay provincias que reciben recursos coparticipables de origen nacional, los cuales representan más del 80% de sus gastos, como, por ejemplo, Chaco, Catamarca y Formosa. No menos cierto es que una parte importante de estos presupuestos son utilizados para el funcionamiento de los servicios estatales, salarios y programas sociales provinciales. Por lo tanto, su eliminación o reducción significaría una expulsión de obreros por la vía de la reducción o desaparición del salario.

El pasaje al sector privado

No obstante, el dirigente de Libertad Avanza asegura que no echaría a un solo obrero estatal, sino que propondría un retiro voluntario y una indemnización, pues el trabajador se iría por su cuenta al sector privado, donde habría mejores salarios. Pero ¿habría demanda de empleo? No se sabe. Lo único que se puede interpretar es la posibilidad de que con una rebaja de impuestos y consecuentemente del gasto social los obreros estatales verán reducidos sustantivamente su salario. De allí que, sin posibilidades de reproducir sus condiciones de vida por ausencia o rebaja de sueldos, o sea, objetivamente despedidos, los obreros buscarán trabajo donde haya y de cualquier cosa, pues sin una fuente de ingresos permanente, no hay forma de sobrevivir. Esto significa que las medidas del consenso liberal establecen por efecto, y sin decirlo, una rebaja del salario y crean una gigantesca competencia entre obreros ocupados y desocupados por un contrato en cualquier tipo de empleo en el sector privado. Vaya como ejemplo los obreros que se emplean en Rappi o Glovo muchos de los cuales son venezolanos empobrecidos expulsados de su país y abiertamente desocupados quienes, carentes de una fuente de ingresos, se emplean en las peores condiciones laborales.

Luego, Milei señala que el Estado sólo debiera financiar a las fuerzas de seguridad y a la justicia, el resto de los servicios dejaría de ser sostenido por el fisco. ¿Y qué pasaría con la salud y la educación? ¿Y con los obreros que se emplean en esos sectores, los docentes, los médicos? La salud sería totalmente privatizada para no ser “doblemente” pagada, nos dice Milei. En un país con más de un 40% de la población empobrecida y con salarios cada vez más bajos, ¿quién puede pagar una atención en salud? ¿Cuántos médicos dejarían de tener empleo por el simple hecho de que la población no puede pagar por su atención? Quizás Milei tenga en mente para el ámbito de la salud una propuesta parecida a la que tiene en materia educativa. Aunque no queda del todo claro si se trata de la educación universitaria o de la educación básica y común (primaria y secundaria), la propuesta de los libertarios consiste en un sistema de voucher, según el cual, el Estado reasigna toda la plata que hoy va dirigida directamente al funcionamiento de los establecimientos o bajo la forma de salarios de los docentes, a la población. Luego, los asistentes al mundo educativo eligen a qué Institución asistir y pagan con ese voucher entregado por el Estado. ¿Qué sucedería con este sistema? Si la institución tiene mucha matrícula será financiada, y la que no lo tenga, desaparecerá. Los docentes no serán pagos y tendrán que buscar trabajo en otro lado. Los estudiantes, lógicamente, deberán tener buenas calificaciones, de lo contrario, dejarán de tener la posibilidad de asistir a la institución. Conclusión:

varios docentes y médicos se quedarán sin empleo. ¿Esto garantiza un buen sistema educativo? No necesariamente. Simplemente, la propuesta mueve algunas variables económicas en el gasto social. En relación con los planes sociales, el consenso liberal señala algo semejante a lo propuesto para el empleo estatal. Milei nos dice que no dejará de pagar ningún plan, que con el tiempo los beneficiarios se irán traspasando al sector privado y registrado de la economía y, consecuentemente, no habrá más “planeros”, pues se crearán más puestos de trabajo con mejores salarios. Sin embargo, no hay nada nuevo en esta política hacia los beneficiarios de programas de empleo. En este sentido, el kirchnerismo primero (a través del Programa de Inserción Laboral), el macrismo después (a través del Empalme) y ahora el Frente De Todos, vienen llevando a cabo esta estrategia que no ha dado ningún resultado favorable. Al contrario, ha sido todo un fracaso (menos del 2% del total de beneficiarios fueron traspasados al sector privado en los años que llevan estos programas). Va de suyo que el ajuste en el rubro de los planes sociales y programas de empleo ya está en marcha desde hace rato. En primer lugar, los montos pagados han visto reducir su poder de compra desde el momento mismo de su sanción (una caída del 65% entre 2010 y 2022). En segundo término, el Frente De Todos no sólo puso un límite a nuevas altas en el programa Potenciar Trabajo, sino que, además, ha comenzado a reducir su cantidad. En dos tandas, una a fines de 2022 y otra en febrero de 2023, se expulsaron a casi 160 mil beneficiarios.

¿Y en qué condiciones irán a parar los empleados estatales y los beneficiarios de planes sociales al sector privado? Para ello, el consenso liberal propone la reforma laboral, algo que también ya está en marcha, pero sería más profunda que la actual. ¿De qué modo se pondría en marcha la “nueva” reforma laboral según los liberales? Con mayor flexibilización. ¿Más de la que existe actualmente? Sí. Pero eso sí, con Seguro de Desempleo por gremio. Un sistema parecido al que ya existe con los empleos más precarios de la economía registrada actual, a saber, la construcción y las ocupaciones rurales. Es decir, un sistema de seguro de desempleo con fondos de los propios trabajadores (como el ya existente Fondo Nacional de Empleo) del estilo de los, otra vez, ya vigentes programas interzafra e intercosecha, los cuales, en momentos de desempleo abierto por el paro de la actividad, otorgan un beneficio que constituye una migaja para la familia obrera. Un sistema brutalmente empobrecedor.

Lo viejo y lo nuevo

Cualquier “retoque” que se haga en el gasto social tal como lo proponen los liberales tendría consecuencias en una infinidad de programas sociales como el PROGRESAR, la AUH, los programas alimentarios, es decir, el programa liberal consiste en un ajuste que va contra el sostenimiento actual y precario de millones de familias obreras. Un ajuste que ya está en marcha, pero que se profundizaría. A esto debe agregarse la propuesta de Milei de reforma previsional por la vía del aumento de la edad jubilatoria y la modificación de su régimen de movilidad que debiera adecuarse a la evolución del PBI para no generar un mayor déficit fiscal. Cabe destacar que el Frente De Todos ya viene enarbolando un ajuste feroz contra los jubilados (caída del 18,5% del presupuesto dirigido a jubilaciones y pensiones entre 2017 y 2022) y que el cupo de las pensiones no contributivas frenó su curso ascendente desde el año 2015 a 2022. Consciente de tremebundo ajuste, Libertad Avanza propone la creación del Ministerio de Asistencia Social (luego de la eliminación de unos cuantos) el cual debiera atender “las probables repercusiones de la ‘motosierra’ durante la ‘transición’ y garantice que ‘la gente morfe’”.

Sin embargo, toda la estrategia liberal carece de medidas concretas que resuelvan el problema del empleo. La causa de los problemas de la economía y del empleo en Argentina no remiten a una cuestión monetaria o de déficit fiscal, como señalan los liberales. Ni siquiera es un problema de la deuda externa o la inflación. Todas estas no son otra cosa que manifestaciones de la escasa productividad del capitalismo argentino (comparada con otras economías del mundo) y, consecuentemente, la baja escala de producción. Es decir, la Argentina padece un problema de crecimiento, que no es otra cosa que de producción de valor. El capitalismo argentino pierde terreno en la economía mundial porque no produce valor como producen sus competidores. Por lo tanto, la única solución posible radica en incrementar la producción de valor, o sea, de escala y de productividad. Sólo así se resuelven los problemas del trabajo, creando empleo productivo y no superfluo o subsidiado por el Estado. Mientras que el kirchnerismo impulsó la estatización del desempleo sin crear empleo productivo, el consenso liberal pretende hacer que el sector privado, casi como por arte de magia y por su propia voluntad, genere puestos de trabajo, ayudado por algunos cambios en materia impositiva, laboral y jubilatoria desde el Estado. La solución liberal sólo redundará en ajustar algunas variables macroeconómicas para que los empresarios del sector privado inviertan (si tienen la voluntad) y la economía crezca. Pero, esta tentativa no contempla un plan concreto de creación de empleo, sino la expectativa del empresariado argentino, el que ya a esta altura del partido, con mucha condonación de deuda y evasión fiscal, no ha planteado resoluciones de largo plazo, por el contrario, ha sido parte del problema.

Además, individualmente los empresarios no pueden resolver los problemas que afectan al conjunto de la población. Sólo un Estado que planifique la totalidad de la economía puede trazar un horizonte, una estrategia y resolver los problemas económicos y de empleo: dónde invertir, en qué, con quiénes, qué vender, qué comprar, qué producir y cuánto. Ni la integración de personas por un subsidio o en trabajos superfluos, ni el achicamiento del Estado echando gente resuelven el desempleo. La única solución posible es la creación de empresas estatales que empleen a millones de obreros en actividades productivas. Hay que empezar a pensar al revés.

El mercado de carroña en el capitalismo argentino

El affaire de los bonos y el funcionamiento de la deuda argentina



Juan Manuel Duarte y Damián Bil
Vía Socialista

La recompra de bonos por parte del Estado y la posterior investigación impulsada por Massa nos permite introducir algunos aspectos poco frecuentados de la deuda pública argentina.



Sergio Massa
@SergioMassa

Desde que asumimos en [@Economia_Ar](#) planteamos unos objetivos claros para normalizar nuestra micro y macroeconomía y mejorar el perfil de nuestra deuda. Por eso, hoy anunciamos una operación de recompra de la deuda externa argentina por más de 1.000 millones de dólares.

¿Ataque desde las sombras?

El 18 de enero pasado, Sergio Massa anunció la recompra de títulos públicos por un monto de US\$ 1.000 millones de dólares. Días más tarde, solicitó que se inicie un proceso de investigación debido a que se habría filtrado información de la recompra antes de su anuncio, un caso de “inside information” según la normativa que regula el mercado de capitales. Eso habría beneficiado a determinados inversores, lo que les permitió entrar a un negocio asegurado con anticipación: la compra por parte del Estado elevaría las cotizaciones de los bonos, y quienes los tuvieran antes se verían beneficiados. Según Massa, estaríamos frente a “un ataque especulativo contra la moneda nacional”, aunque esto oculta buena parte de la realidad. Revisemos cómo funciona y lo que ocurre en el peculiar mercado de bonos argentino.

Los famosos “títulos públicos”

En principio, hay que entender el carácter de un bono. Un bono es un instrumento financiero que permite a una organización (un Estado, por ejemplo) hacerse con una cantidad de capital para un fin cualquiera, a cambio de pagar una tasa de interés. Todos los países emiten bonos para financiarse. Y los compromisos de esos bonos (los intereses y las amortizaciones de capital) forman parte de la deuda pública del Estado. Los compromisos por bonos que cotizan en el extranjero forman parte de la deuda externa, no solo las obligaciones con el FMI y otros organismos. Lo cierto es que la deuda en concepto de Títulos Públicos (Bonos, Letras del tesoro y otros) constituye más del 70% de la deuda bruta del Estado argentino.

Compañías de inversión, fondos de pensión, ahorristas particulares invierten en bonos en todo el mundo. Se la considera una inversión conservadora, similar a lo que en Argentina se podría hacer con un plazo fijo, o como quien usa aplicaciones estilo Mercado Pago y transfieren el sobrante de su sueldo o ingreso para recibir un interés. Por ejemplo, los bonos que emite el Estado norteamericano rinden en torno a un 3,5% de interés anual. Esta tasa se debe a que los EEUU son considerados buenos pagadores de sus deudas, por lo que prácticamente no hay riesgo de prestarle plata. Pero este no es el caso de Argentina.

Haste la fama (y échate a reperflar)

Ya desarrollamos la idea de que Argentina tiene toda una tradición en no honrar sus compromisos financieros. En ese sentido, JP Morgan elabora el EMBI (Emerging Markets Bond Index), índice que calcula el spread o diferencia entre la tasa que ofrecen los bonos de un país respecto de la de los norteamericanos (que se consideran “sin riesgo”). La diferencia se calcula en “puntos básicos”, lo que se popularizó como “riesgo país”. Por cada 100 puntos, el país en cuestión deberá pagar 1% adicional de la tasa de interés en dólares que ofrecen los bonos de EE.UU. En Argentina, estas semanas se ubicó en torno a los 1.800. Esto significa que, de pedir prestado, debería convalidar tasas (al menos) un 18% mejores que los intereses que paga la deuda estadounidense.

Financiarse con tasas caras es un problema en general. Le pasa a los laburantes, porque en la Argentina es riesgoso prestarle a un trabajador: puede quedar desempleado, o tener aumentos por debajo de la inflación, lo que hace difícil pagar ese préstamo. En el caso de un Estado nacional, si precisa financiar una gran obra, puede pedirle a algún organismo de crédito, pero también puede licitar bonos para obtener recursos de ahorristas o de otras instituciones. Pero el país también toma deuda para consolidar obligaciones previas, y emite bonos para cambiarlos por otros que vencen (rollover). O debe negociar estiramiento de los plazos de devolución, o bajar las tasas (“reperflar” o patear para adelante). Por este motivo, por su fama de moroso, es que la Argentina solo se endeuda a tasa elevada.

En el mercado de bonos, existe el mercado primario, donde se compra el bono emitido por el Estado. El mismo funciona como un pagaré, donde el país se compromete a devolver en cierta cantidad de tiempo ese dinero más los intereses periódicos. Pero si el comprador de ese instrumento desea venderlo por el motivo que fuera antes del plazo de vencimiento, se oferta en el mercado secundario (MERVAL), donde cualquiera puede comprarlo. Aquí, la oferta y demanda de ese bono determinará su precio. Si se opera al valor nominal del bono, se dice que cotiza a la par. Pero si el bono es de un emisor con fama de moroso, suele venderse por debajo de su precio nominal (bajo la par).

Uno de los bonos que estuvieron en el centro de la recompra fue el GD30, cuyo capital se terminaría de devolver el 9 de Julio de 2030. Este es importante, porque es de los títulos más negociados en el mercado secundario y su valor se usa como referencia para determinar, por ejemplo, el Dólar MEP o Dólar Bolsa.

Gráfico 1 - Cotización histórica del Bono GD30 (En USD) 2021 -2023



Fuente: cotización de BYMA y plataforma TradingView

Se observa que, en cuanto al precio (gráfico 1), se da un considerable descenso en el momento en que Guzmán presentó su renuncia, el interinato de Batakis, y luego se recupera tras la asunción de Massa y las medidas anunciadas (como el “Dólar Soja”). En cuanto a su valor, nunca superó la barrera de los 41 dólares. De hecho, comenzó su vida valiendo eso. Recordemos ahora el ejemplo del Bono de 100 dólares. Ese valor no era arbitrario, ya que las planchas de bonos valen en su emisión 100 dólares. Pero el GD30 arrancó valiendo 40 dólares, lo que significa que cotiza bajo la par. La paridad actual se ubica en el 37%, lo que significa que por cada USD 37 que un inversor ponga hoy en ese bono, el Estado deberá pagarle USD 100, en cuotas, hasta el 2030. Parecería un negocio redondo, si no tuviéramos en cuenta lo que venimos exponiendo: probablemente Argentina nunca pague eso, reestructure su deuda, o cambie ese bono por otro que tenga un vencimiento más tarde. Por eso, cuando un bono cotiza tan bajo, se considera que está a “precio de default” o a “precio buitres”.

Papelitos para confeti

El anuncio de Massa perseguía una serie de objetivos. Por un lado, comprar los Bonos significa negociar con menos gente una eventual restructuración. Por otro lado, si el Estado aparece de golpe comprando una enorme cantidad de bonos, esa demanda impactaría elevando el precio. Si esto ocurre en una canasta de bonos representativa, baja el riesgo país, lo que permitiría endeudarse a tasas más baratas. El problema es que, con la delicada situación del panorama económico, cualquier medida de estas características no es más que un parche. Para colmo, se habría filtrado la información, lo que permitió que inversores se beneficien con la posterior suba. Aun así, si miramos el detalle de esos días de cotización del instrumento de referencia, veremos que la suba no fue espectacular.

Puede observarse un movimiento inusual dos días antes del anuncio, que se ve reflejado tanto en la cotización como en el volumen (que resulta de la cantidad de operaciones de compra y venta que se realizan en el día, y es el más alto desde que se emitió). Las sospechas se completan con los movimientos posteriores, donde opera a la baja producto de un gran volumen de venta de este (inversores que ya no lo quieren). Pese a esto, se demuestre o no la maniobra en cuestión, la millonaria operación de Massa hizo variar muy poco el precio: de 32 a 37, sin siquiera llegar a los 40 de Guzmán.

Un problema complejo

El arco progresista piensa a las finanzas escindidas de la producción. La “financiarización” de la economía es mala, por oposición a la economía “real” o “de la producción”. El argumento es que en el capitalismo contemporáneo la compra de bonos para especulación financiera redonda en mayores ganancias que la inversión productiva para las empresas. Ahora bien, según datos del Tesoro norteamericano, el valor de todos los instrumentos públicos emitidos en ese país ascendía en diciembre a 23,3 billones de dólares. Si consideramos la capitalización total de mercado de las empresas que

cotizan en las dos principales bolsas de Nueva York, la New York Stock Exchange y el NASDAQ, sumaban 39,3 billones de dólares. En el principal mercado de capitales del mundo, lo invertido en bonos es poco más de la mitad de lo que se invierte en el sector “productivo”. En la Argentina no sucede lo mismo. No por algún designio malvado o por la dominación extranjera, sino porque aquí prácticamente no hay negocio rentable en el cuál invertir, fuera de dos o tres actividades o firmas puntuales. No es la dinámica propia de la

Gráfico 2 – Cotización del Bono GD30 (En USD). Enero 2023



Elaboración propia sobre cotización de BYMA y plataforma TradingView.

acumulación capitalista “sana” la que impulsa la economía general (y con ello el grueso de los ingresos tributarios o una lógica de endeudamiento para incrementar la capacidad productiva como ocurría a comienzos de siglo XX), sino la intervención del Estado mediante transferencias y medidas de fomento en base a endeudamiento para sostener una farsa de acumulación capitalista. Es la burguesía que opera en el país, y no la banca extranjera, la que precisa de ingentes transferencias (directas e indirectas) para subsistir. Justamente, por su parasitismo, es que el mercado de acciones es más bien mediocre y con predominancia de títulos públicos. Para que una empresa pueda cotizar en la bolsa de valores hace falta, entre otras cosas, tener las cuentas claras. La burguesía planera de Argentina mal puede aspirar financiarse a través de la inversión privada mediante acciones, por el hecho de que la mayoría de sus empresas no son más que negocios prebendarios, que dependen de protecciones aran-



celarias o subsidios para existir. No pueden competir y sus balances no resisten ninguna auditoría. Se suele mencionar la dependencia del FMI como el gran problema de la economía argentina. Pero no solo el porcentaje de la deuda bruta total con ese organismo es minoritario, sino que más de la mitad de los bonos argentinos están en manos del mismo Estado nacional, adquiridos en el mercado secundario que realiza el Banco Central con emisión y la ANSES a través de su Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Es lo que hace Massa ahora. Constituye una transferencia de riqueza para sostener una estructura deficitaria que no es independiente de la estructura productiva, sino su consecuencia. Con un agravante en los últimos años, que fue motivo de escándalo político en la oposición en los últimos días: ante la imposibilidad de endeudarse en el mercado internacional desde 2018, lo que crece a paso acelerado es la deuda en pesos (del Estado consigo mismo), que ya supera un tercio de la deuda bruta total. Esto tiene su expresión más palpable en los instrumentos del BCRA, como las Leliq, cuyo monto pasó de ser un 78% en relación a la base monetaria en 2019 a casi duplicarla en 2022. Avanzaremos con un análisis de la deuda en pesos en el próximo número. Entonces, el enemigo inmediato que tienen los trabajadores argentinos es la burguesía planera y sus representantes sindicales y políticos, muy interesados en que concentremos nuestra energía en denunciar saqueos y fugas “anti-nacionales”, mientras no perturbemos la maquinaria de subsidios que les permite sobrevivir a pesar de su agotamiento histórico. Ya sea mediante la toma de deuda con el FMI, o con la emisión de títulos, las “finanzas” tienen la función de garantizar la reproducción de los capitalistas argentinos: los subsidia, les presta barato, les mantiene el dólar, les facilita insumos. Y, a pesar de todo ello, la economía va cada vez peor.

Para romper con el “peso de la deuda” sobre la dinámica económica, no alcanza con atacar el síntoma (la deuda en sí), sino que hay que enfrentar la enfermedad. Es decir, la forma en que se reproduce la vida social en este país. La deuda per se no es negativa: por ejemplo, sirve a las empresas para mejorar su competitividad, invirtiendo y ampliando la escala rápidamente sin tener que esperar a que se cumpla el ciclo de rotación; o a muchos países para incrementar su infraestructura productiva mejorando la competitividad sistémica. Un gobierno socialista debe utilizar todos los recursos a disposición, no para sostener empresarios parásitos. Mediante la lógica de un Estado productivo a partir de la planificación económica, es posible relanzar la economía y descartar la deuda como “problema”, puesto que no tendrá peso sobre las finanzas públicas o no será necesaria en absoluto. Pero para ello, es necesario pensar en la raíz de los problemas argentinos. Estos solo se solucionarán transformando la estructura productiva con una lógica socialista.

1Telam, 20/01/2023, <https://tinyurl.com/yx3x2yjr>.

2Estructura de la Deuda Bruta argentina, Ministerio de Economía, <https://tinyurl.com/4hsbx89n>

3Información de Datos Macro, <https://tinyurl.com/8fkax4pv>

4“Bonds and Securities”, Departamento del Tesoro, <https://tinyurl.com/47vpxddr>

5World Federation of Exchanges, noviembre de 2022. <https://tinyurl.com/9fvcbmmt>

6Las perspectivas criticadas en este acápite pueden repasarse en Prensa Obrera, 16/03/2022, <https://tinyurl.com/3sj3zze4>; Mercatante, E (2019).

7Salir del fondo: la economía argentina en estado de emergencia y las alternativas ante la crisis. Buenos Aires, IPS; La Izquierda Diario,

18/01/2023, <https://tinyurl.com/yzb4e3ad>.

8Ver una crítica a esta perspectiva en nuestra publicación ¿Nos gobierna el FMI? (Sanz Cerbino, Gonzalo. Biblioteca de la UNI n° 11). <https://razonyrevolucion.org/nos-gobierna-el-fmi/>

9Ver Cronista, 3/11/2022, <https://tinyurl.com/bdd53323>; y Ámbito, 16/11/2022, <https://tinyurl.com/2bb3w9we>.

10La magnitud de la base monetaria en el cuatro trimestre de 2022 fue de 5,2 billones promedio, mientras el stock de instrumentos del BCRA superó los 10 billones.

Parques industriales: puntales del desarrollo o cáscaras vacías



Martin Pezzarini y Marina Kabat
Vía Socialista

Sin resultados a la vista, los parques industriales representan hoy una sangría para el Estado. Hay empresas privadas que ganan fortunas construyendo con fondos públicos parques que luego quedan vacíos. Solo mudar su planta a un parque asegura a un empresario cuantiosos subsidios. Atentos a cualquier oportunidad que les permita pescar algunos votos, gobernadores y, sobre todo, intendentes compiten entre sí por quién tiene el parque más grande. Todos quieren el suyo, sin importar criterios de logística o complementariedad. De este modo, en lugar de apuntalar la planificación, la creación desordenada de parques favorece la ineficiencia y el derroche. Como consecuencia, tenemos centenares de parques industriales financiados por el Estado que solo son cáscaras vacías.

Boom de los parques mientras la producción local se desmorona

En las últimas dos décadas, los parques industriales se multiplicaron en el país. Se estima que entre 2002 y 2022 pasaron de 80 a 600 predios de este tipo.¹ Esto equivale a un crecimiento del 600 por ciento. En el mismo período, el PBI industrial apenas subió un 26%.² Si vemos con más detalle, observamos que ese crecimiento industrial se concentra en los primeros años del milenio con la recuperación post crisis del 2001 y tiende al estancamiento posterior. Hoy la industria está estancada. Hay despidos y cierres de fábricas. Las mismas firmas de los parques industriales se achican, despiden o se funden.³ Sin embargo, cada vez hay más parques industriales. Este crecimiento parece acelerarse en tiempos preelectorales. ¿Cómo puede ser posible? ¿Quién los financia? ¿Quién se beneficia?

En Argentina, los parques industriales se mantienen en base a transferencias de recursos del Estado hacia el sector privado. Como otros [subsidios estatales al sector privado](#), estas transferencias asumen todas las formas y colores: cesión de tierras, exención de impuestos, financiamiento de infraestructura, créditos con tasa de interés negativa, aportes de fondos públicos no reembolsables, compra estatal de equipos, entre otras. El Estado Nacional, entre 2010 y 2018, otorgó 192 Aportes No Reintegrables (ANR) para la infraestructura de los parques y 123 créditos con tasas bonificadas para las PyMES que operan en estos espacios.⁴ Pero, las empresas no maman solo de la teta del Estado nacional, aprovechan también las también jugosas ubres provinciales y municipales.

En Córdoba entre 2019 y 2022, los parques industriales pasaron de 9 a 47.⁵ Esto incluye los parques recientemente anunciados en La Para (Río Primero), Toledo (Santa María) y Cruz del Eje. Estos parques solo se sostienen por las transferencias y subsidios que realiza el sector público provincial. Por un lado, el Estado dispone de Aportes No Reembolsables de hasta \$5.200.000 para la infraestructura de cada parque. Por otro lado, en el marco de la Ley de Parques Industriales (7255) y la Ley de Promoción Industrial (10.792), las empresas instaladas en estos predios cuentan con de importantes ventajas. Los beneficios incluyen exención por quince años del pago de impuestos a los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos e Impuesto Inmobiliario. Durante siete años, las firmas también pueden gestionar subsidios al consumo energético y por la contratación de trabajadores a tiempo indeterminado. Por último, la Provincia acordó con el Banco de Córdoba y Banco Santander dos líneas crediticias a tasas subsidiadas para la construcción de galpones sustentables, la adquisición de tecnologías, y otras obras. Estos créditos tienen tasas que rondan entre el 20% y el 30% anual, muy por debajo de la inflación. Y, además, los beneficiarios tienen un año de gracia hasta comenzar a pagar. En Buenos Aires, la Ley Provincial 13.656 establece que los parques industriales tienen beneficios como acceso a inmuebles del Estado, exención de impuestos provinciales, financiamiento en condiciones preferenciales, entre otros.

La guerra de los parques

No hay intendente que se precie que no desee un parque propio. Se estima que el 80% de los parques industriales del país son de gestión pública municipal.⁶ Y, como hay poca industria y muchos intendentes que quieren atraerla a sus municipios, se desata la guerra de los parques. En esta singular batalla, cada municipio tratará de superar los subsidios que ofrecen sus rivales. Se multiplican los beneficios de todo tipo. En el Parque Industrial de Bahía Blanca, el gobierno local estableció la exención de tasas y derechos municipales a quienes se instalen en ese predio. Algo similar ocurre en el Parque Empresarial Austral de Pilar o en los predios ubicados en el partido de Berazategui, donde las empresas no pagan impuestos municipales si contratan trabajadores que residan en esos distritos.

En todo el Conurbano Bonaerense, más del 80% de los parques ofrecen este tipo de ventajas a las empresas que se instalen en sus predios.⁷

La competencia entre provincias y municipios por atraer al mismo reducido grupo de empresas hacia sus parques hace que cada vez se ofrezcan mayores subsidios, sin que por ello la industria crezca. Los únicos beneficiados son los empresarios que no invierten en industria ni un centavo más de lo que preveían. De hecho, terminan invirtiendo menos. No deciden su localización hasta que la puja eleve al máximo los subsidios estatales y reduzca a cero los impuestos que les corresponden. Mientras, las empresas hacen su agosto con la plata que todos pagamos al Estado.

El negocio del tratamiento de residuos

El loable propósito de cuidado del medio ambiente es usado de fachada para nuevos subsidios. El Parque Industrial Curtidor de Lanús es financiado con fondos públicos. Antes había fracasado un proyecto de gestión privada que iba a desarrollarse con fondos públicos [sin que nadie haya explicado a dónde fueron los recursos que giró el Estado](#). El objetivo del parque es que las curtiembres dejen de contaminar el Riachuelo. El Estado pone el terreno, monta toda la infraestructura del parque y construye una costosa planta de tratamientos de efluentes industriales para que luego sea utilizada por las pequeñas curtiembres de la zona. Las empresas se quedan con las ganancias, mientras que el Estado asume los gastos más importantes de la producción.

En Colón, Entre Ríos, el municipio y la firma Bonnin Hermanos impulsan la apertura de un Parque Industrial Mixto.⁸ Además de acceder a todos los beneficios que implican estos proyectos (transferencias, exención de impuestos, créditos, etc.), la productora de pollos busca que el Estado se haga cargo de las instalaciones necesarias para el tratamiento de los residuos industriales, una de las partes más costosas de la infraestructura. Al igual que en Lanús, vemos que las empresas hacen negocios y se llevan ganancias, mientras presionan para que el sector público se responsabilice de los gastos productivos asociados a evitar la contaminación. Cabe señalar que Bonnin Hermanos es una firma exportadora líder en su área con ganancias millonarias ¿por qué deberíamos pagar todos por parte de su proceso productivo?

Si mientras la industria se estanca los parques crecen un 600%, mucho de ese crecimiento es ficticio. Mucho humo electoral y mucho emprendimiento inútil que quedó varado al perder la guerra de los parques. Gran cantidad de los parques anunciados e inaugurados ni siquiera funcionan. Decenas de predios apenas cuentan con un arco de entrada y un cartel con la publicidad del gobierno que impulsa el proyecto. En 2016, por ejemplo, 73 de los parques registrados no contaba con ningún trabajador⁹. En muchos de ellos tampoco había empresas funcionando, y lógicamente, los lotes vacíos se contaban por miles.

Hasta en el Parque Industrial Pilar, uno de los más exitosos, se estimaba que de las parcelas vendidas solo el 60% tenía algún establecimiento (aunque no necesariamente industrial).¹⁰ Lo que muestra el costado del negocio inmobiliario de estos parques. Los empresarios compran estos lotes con subsidios del estado, y ni siquiera ponen un ladrillo. Antes se hablaba de terratenientes absentistas que tenían campos que supuestamente no ponían en producción. Pues bien, aquí tenemos industriales absentistas, que encima se nutren del Estado.



La planificación ausente

Es evidente que estos parques no responden a una mayor planificación e industrialización de la economía argentina. Si en papeles su número ha aumentado tanto es porque se le da el nombre de parque industrial prácticamente cualquier cosa. ¿Si se inauguran hospitales sin médicos, porque no parques industriales sin fábricas?

En el peor de los casos, sale una ley, se reserva un espacio, se pone un cartelito y, ceremonia mediante, se consiguen notas de prensa. Luego el predio queda abandonado. Cualquier obra que se haga en el predio beneficia a las empresas constructoras que licitan la obra. [La patria contratista](#) gana a costa de los recursos del Estado y, mientras les pagan, no les preocupa si estas instalaciones luego se usan o no.

En el mejor de los casos, se agrupa sin ningún criterio a algunas empresas preexistentes en un mismo espacio. Pocos son los parques especializados en una misma rama de la producción, lo que podría facilitar la sinergia entre las empresas y una mayor eficiencia del conjunto. Por el contrario, muchos predios reúnen actividades tan disímiles como la fabricación de tapas de empanadas, caucho, cosméticos y equipos de construcción. Simplemente se agrupan por las ventajas que les ofrece el Estado para operar en el parque.

No se hace nada para garantizar la plena ocupación de los parques. En general, no se busca la especialización productiva de cada parque ni su complementariedad con otros cercanos. No se compran insumos en forma conjunta ni se promueve el establecimiento de cadenas productivas.¹¹ Más que parques industriales propiamente dichos, son meros “countries industriales o terciarios”, donde lo único que se aprovecha en forma conjunta es la seguridad y los subsidios del estado. El problema no son los parques, sino lo que se ha hecho con ellos. Solo un Estado productivo que planifique a escala nacional el conjunto de los parques industriales con una visión de conjunto puede dejar atrás estos negociados. En este punto la descentralización solo favorece los intereses privados que dividen y reinan, mientras los intendentes se pelean entre sí para atraerlos. Desarrollo industrial, competitividad y ordenamiento territorial, estos beneficios están al alcance de quién proponga gobernar la Argentina con un Estado que desarrolle por sí mismo las grandes obras públicas y las gestione en forma centralizada. Vía Socialista es el partido capaz de hacerlo.



 Gobierno de Río Cuarto

Se inauguró el nuevo Parque Industrial d...

Notas al final

- 1 Marcelo Bätz: “En 2023 habrá más de 600 parques industriales en todo el país - TELAM digital 09-04-2022)
- 2 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: Cuentas Nacionales, Agregados macroeconómicos (febrero, 2023).
- 3 Gerardo Cadierno: “Crisis y desempleo en Parques Industriales”, *Conexión Parques* (23-08-2019)
- 4 Ministerio de Desarrollo Productivo (marzo, 2020). Informe y Estado de Situación 2015 - 2019. Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales
- 5 Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba: “El Gobierno entregó \$59.200.000 en Aportes No Reembolsables a Parques Industriales” (noviembre, 2022).
- 6 Sergio Lanzafame: “Cuáles son las ventajas de instalarse en un parque industrial”, *El Cronista* (05-02-2020)
- 7 Cushman & Wakefield: “Parque industriales de Buenos Aires: la hora de crecer” (2018)
- 8 Municipalidad de Colón: “Se concretó la cesión de terrenos para el emplazamiento del Parque Industrial de Colón”, *Prensa Municipal* (12-12-2021)
- 9 Ministerio de Desarrollo Productivo (junio, 2020). Informe N°1. Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales
- 10 Briano L. E., Fritzsche F. J. y Vio M. L. (2003): “El lugar de la industria. Los parques industriales en la reestructuración productiva y territorial de la Región Metropolitana de Buenos Aires”, en *EURE* (Santiago), 29(86), pp. 109-135.

11 *Ibidem*.

12 UNESCO: *III Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos convocada por la Unesco. Tokio, 25 de julio al 7 de agosto de 1972, PARIS, Unesco, 1972, p. 19. Disponible online en: <https://goo.gl/xgm4th>*

Riesgos del trabajo: La salud obrera vale cada día menos



Ianina Harari
Vía Socialista

La idea de que el trabajo es salud no aplica cuando se habla del trabajo capitalista y de la salud obrera. En esta sociedad la salud obrera se resiente en el trabajo y por ello el movimiento obrero luchó por regulaciones que la protejan. No se trató solamente de mejorar las condiciones de trabajo, en particular las de higiene y seguridad, sino de que el capitalista se hiciera cargo de los perjuicios a la salud del obrero. Ello supuso un aumento de los costos para el empresario: gastos en mejoras de las condiciones de trabajo y en el pago frente a accidentes laborales. Cuando la burguesía se queja de los costos laborales, incluye estos gastos. Es decir, el cuidado de la salud obrera es un gasto a reducir y por ello la legislación que regula los riesgos de trabajo se fue modificando en el tiempo de forma tal de que el capitalista tenga menores costos. En particular, se buscó desincentivar los juicios laborales de forma tal que al capitalista no le salga tan caro arruinarles la salud a sus trabajadores.

Una avanzada contra la “industria del juicio”

En 1915, Argentina promulga la primera ley sobre Accidentes de Trabajo (n° 9.688). Pero esta solamente abarcaba a trabajadores de labores consideradas peligrosas. En ella, se establecía una indemnización tarifada frente al accidente laboral. El cobro de ese monto implicaba la renuncia a una demanda judicial contra el empleador por dolo o negligencia. El cobro de la indemnización tarifada tenía al menos una ventaja, porque demoraba menos que la espera de la resolución de una demanda judicial, aunque el monto fuera menor.

En los '90, en el gobierno de Menem, se crearon las Comisiones Médicas de Jubilaciones y Pensiones (Ley 24.241 de 1993) que cobrarían protagonismo unos años después. En 1995, el gobierno creó el sistema de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, mediante la ley 24.557. Las Comisiones Médicas tuvieron un rol central. Eran parte de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y su tarea era determinar si correspondía catalogar los casos denunciados como enfermedad o accidente era laboral y, en consecuencia, establecer el grado de incapacidad del trabajador. Su intervención se daba en los casos en que el trabajador decidía renunciar a una demanda judicial y resolver el caso en una instancia administrativa que le permitía cobrar en menor tiempo. Otro elemento que introdujo el menemismo para limitar la litigiosidad fue circunscribir la responsabilidad civil del empleador por los accidentes o enfermedades laborales a los casos en que existiera dolo (intención de producir el daño). Este criterio fue posteriormente desestimado en la jurisprudencia.

En 2004, Corte Suprema dictaminó en el caso “Aquino” que el artículo que eximía al empleador de toda responsabilidad civil era inconstitucional. De esta forma, se habilitaba el reclamo judicial de indemnización. Así, se creaba una doble vía de reclamo para el trabajador: la administrativa y la judicial. Mediante la primera se obtenía una indemnización “rápida” y con la segunda se conseguían las diferencias que correspondieren para compensar la totalidad de los daños sufridos por el trabajador, aunque con mayor demora.

Bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, en 2012, se sancionó la ley 26.773, con la cual se retornó al sistema de opción excluyente para poner un coto a la proliferación de juicios por accidentes laborales. Es decir, atacar lo que la burguesía llama “industria del juicio”. Así, el trabajador debía optar de forma excluyente entre la indemnización tarifada de la ART o el reclamo judicial. Además, si el trabajador decide ir por la vía judicial, la demanda se tramitaría en el fuero civil en lugar del laboral, lo que le da una desventaja, porque a diferencia de los juzgados laborales donde se considera al trabajador como la parte más débil, en los civiles las partes son consideradas iguales. En su reforma, el kirchnerismo reemplazó el pago en rentas periódicas por un sistema de pago único. También se implementó la “indemnización adicional” por la cual se paga un monto adicional de pago único al trabajador que sufrió un accidente mientras se encontraba a disposición del empleador en compensación “por cualquier otro daño no reparado por la indemnización” equivalente al 20% de esta. Otra novedad que se introdujo fue que los importes por incapacidad laboral permanente y fallecimiento fueran ajustados por el índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) que publica el Ministerio de Trabajo. Es decir que depende no de la inflación sino de las subas salariales que obtengan en promedio los asalariados en blanco. El gobierno de CFK también reafirmó la vigencia del Listado de Enfermedades Profesionales cerrado que creó el menemismo y solo agregó, en 2014, cuatro enfermedades a la lista, una cifra muy baja si se tiene en cuenta que la propia Superintendencia de Riesgos del Trabajo advierte que mientras las enfermedades laborales representan el 38% de los siniestros del sector formal, solo se reconoce el 2% de enfermedades laborales sobre el total de siniestros registrados. Es decir que hay todavía un gran número de enfermedades laborales por fuera de ese listado.

La reforma kirchnerista tuvo el claro objetivo de desincentivar las acciones judiciales, por la vía de persuadir al trabajador a que elija la vía administrativa y se conforme con la indemnización tarifada, introduciendo “mejoras” y aumentos a las indemnizaciones. Sin embargo, los juicios no se redujeron, sino que aumentaron porque crecieron los litigios contra las ART y las Comisiones Médicas que fueron declaradas por la jurisprudencia como inconstitucionales. El mayor costo que las ART tuvieron por el crecimiento de la litigiosidad se trasladó a las empresas por la vía del incremento de los seguros, por lo cual tenían ahí otro motivo para quejarse por el costo laboral.

En su gobierno, Macri buscó dar una solución a la burguesía con otra reforma al sistema de riesgos de trabajo, mediante Ley 27.348 de 2017, que restringió aún más el acceso a la justicia para el trabajador. La principal reforma consistió en hacer obligatorias las Comisiones Médicas. Si el trabajador no acepta la resolución de las comisiones, tiene que pedir una revisión a la Comisión Médica Central, sin poder cobrar el dinero que le correspondiera y sin poder acudir a la Justicia. Solo después de todo ese proceso administrativo se puede acceder a la instancia judicial. Sin embargo, la demanda no se tramita en el fuero laboral, sino en el de la Seguridad Social, que se encuentra colapsado por los reclamos de jubilados y pensionados. Otra vez, se obliga al trabajador a acudir a tribunales donde no se tiene en cuenta los principios que rigen el derecho laboral.

La reforma macrista trajo controversias en la Justicia y llegó a la Corte Suprema, a partir del caso “Pogonza” contra la ART Galeno, donde el trabajador planteó que la norma impedía el acceso a la Justicia y que se les otorgaba a las comisiones médicas facultades propias de los jueces. Además, cuestionaba su imparcialidad, por el hecho de que son financiadas por las aseguradoras. En 2021, la Corte falló en contra del trabajador y ratificó la constitucionalidad de la reforma macrista y del funcionamiento de las comisiones médicas.

La aplicación de la nueva normativa trajo alivio a las empresas. En primer lugar, porque efectivamente cayó la litigiosidad. Al año de su implementación los juicios laborales cayeron alrededor de un 40%, los costos de los seguros bajaron un 14,5%, lo que supuso un ahorro de \$13.000 millones para las empresas.

Un negocio redondo para la burguesía

La reducción de la litigiosidad que se logró con las sucesivas reformas fue posible por la restricción a los trabajadores del acceso a la justicia laboral. Ello es claro en tanto la cantidad de accidentes laborales reportados no ha disminuido. Las reformas al sistema de riesgos de trabajo tuvieron como único objetivo beneficiar a la burguesía reduciendo el costo que le genera los accidentes laborales. En especial, a las pymes, que es el sector donde se encuentra la mayor cantidad de accidentes y por tanto de juicios. En ese sentido, van en la misma línea que [las reformas laborales que analizamos en números anteriores](#).

Si los accidentes laborales les generan altos costos, lo lógico sería intentar reducirlo. Pero ello implicaría un mayor gasto en mejoras de las condiciones de trabajo que la [burguesía planera](#) argentina no está dispuesta a hacer. Por el contrario, lo que se buscó es minimizar las consecuencias de las pésimas condiciones laborales que existen en gran parte de las unidades productivas argentinas gracias a un prácticamente inexistente sistema de inspección laboral. De esta forma, se beneficia a los empresarios por una doble vía: no se exige el cumplimiento de condiciones de trabajo seguras, lo que les ahorra costos, y se reduce el impacto económico que tienen los accidentes que sufren los obreros. Mientras tanto, los obreros que sufren estos accidentes y que no tienen otro ingreso si no pueden trabajar, se ven obligados a aceptar la indemnización que ofrecen las comisiones médicas si no quieren esperar años a un fallo judicial. Todo el sistema está pensado no para cuidar la salud del trabajador, sino para proteger la ganancia empresaria. En lugar de buscar la forma de perjudicar a los trabajadores en un momento de gran indefensión, el Estado debiera ocuparse de prevenirlos. Un sistema de inspección continuo y eficiente, que fiscalice que se cumplan todas las normas correspondientes colaboraría a reducir la accidentabilidad.

No va a ser a manos de un gobierno burgués que el Estado privilegie la salud obrera sobre la ganancia capitalista. Por ello, es necesario disputar el poder estatal para conformar un gobierno obrero que piense al revés del consenso liberal imperante y lleve adelante un programa socialista que ponga el foco en mejorar la calidad de vida obrera.

La modalidad de jóvenes y adultos como parte integral de la secundaria común



Romina De Luca
Vía Socialista

Existe un aspecto importante de la vida educativa en el que no hay grieta: la crisis de la escuela secundaria. Sí aparecen divergencias acerca de las causas y motivos y, más aún, a la hora de proyectar posibles soluciones. Este consenso parte de una serie de indicadores que no dejan mucho lugar a dudas: 46 de cada 100 estudiantes abandonan la escuela secundaria obligatoria, de los 54 que llegan al último año, solo el 75% egresa en tiempo y forma. El problema viene de arrastre:



conviene recordar que solo 16 de cada 100 que empezaron la escuela primaria terminan en tiempo y forma. Pese a los mecanismos de flexibilización pre y pospandemia -nuevos regímenes académicos para la escuela secundaria, por ejemplo, la secundaria común no logra cumplir con el mandato de la obligatoriedad. Tal vez, parte del problema educativo, se explique también con otros números. Las últimas pruebas realizadas en nuestro país, las Aprender 2021 mostraba que el 44% de las y los estudiantes de la primaria llegaban a fin de ciclo con un nivel de comprensión lectora debajo del básico o básico y lo mismo ocurría en matemática. Cuando ese número se analiza por nivel socioeconómico, el valor trepa a 71 y 68 de cada 100, respectivamente, para lengua y matemáticas. Con esas pericias, transitar la escuela secundaria puede ser una odisea y también o reflejan las Aprender para el nivel. Hace décadas que se ensayan distintas estrategias para maquillar este desgranamiento de una escuela secundaria obligatoria “en los papeles”. La flexibilización es una de las vías de acción. Pero existe otra que, a menudo, pasa desapercibida. Nos referimos a la creación de un circuito adosado a la escuela común para titular a esos jóvenes desertores: la EPJA. Y va a cumplir esa misión en todos sus formatos: el viejo CENS y bachilleratos de adultos o los más recientes semipresenciales Fines 2/Trayectos o virtuales como el viejo Adultos 2000 porteño y hoy devenido en su versión nacional bajo el nombre de “Terminá la secundaria”. Esta estrategia despliega un resultado paradójico: los métodos y teorías con las que se pretende superar un estado de cosas lamentable, termina resultando en una adaptación al statu quo que lo refuerza. La población “excluida” de la escuela seguirá estándolo y los que entran a la secundaria común serán derivados a formatos baratos y cada vez más degradados: la EPJA. A continuación, presentamos un adelanto de una de las novedades editoriales de Ediciones ryr próxima a ver la luz.

Se dice de mi...

En los últimos 16 años, la educación de adultos cobra particular interés en materia de política educativa. En particular, para garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad del secundario, sancionada por la Ley de Educación Nacional, en 2006. Tal como reza la ley, se trataba de brindar posibilidades de educación “a lo largo de toda la vida”. Esas “oportunidades” debían ser peculiares y particulares, tal como expresa el artículo 48º de la norma. Más precisamente, la modalidad proporcionaría “formación básica que permita desarrollar capacidades de expresión, comunicación, relación interpersonal y de construcción del conocimiento, atendiendo las particularidades socioculturales, laborales, contextuales y personales de la población beneficiaria”. Las certificaciones parciales, el reconocimiento de saberes informales, la emergencia de formatos semipresenciales o a distancia son reconocidos por la Ley como formatos posibles para desarrollar esta tarea educativa. Además, estos múltiples esquemas se presentan como nuevos mecanismos de inclusión y de justicia social. Todos ellos, valga decirlo, son defendidos por el personal político de turno sin importar su tipo y color. Al Fines 2 (Trayectos), Juntos por el Cambio le opuso la nacionalización de Adultos 2000 bajo el nombre de “Terminá la Secundaria”. A la semipresencialidad, le respondieron con virtualidad. Hacer memoria, no viene mal. Este esquema lo defendió Mauricio Macri en su lanzamiento a la candidatura presidencial de 2014 y hoy Horacio Rodríguez Larreta hace lo mismo en su propia carrera presidencial. Si en 2014 como oposición rechazaron el Fines 2, cuando ocuparon la presidencia, en 2015, lo catalogaron como “el intento más ambicioso de diseño e implementación de políticas para superar (esa) [la] brecha educativa”. No se ahorraron elogios: “considerar al plan como una de las innovaciones recientes más importantes en materia de diseño de políticas educativas que, por lo

tanto, merece ser consolidado y difundido en nuestro medio y en la región latinoamericana cuyos países confrontan desafíos similares en materia de finalización del nivel secundario y brecha en los logros educativos de la población joven y adulta. Se recuperaría así el rol de referente que tuvo nuestro país en América Latina en materia de innovaciones educativas y que alcanzó momentos de tan alto impacto como el de la reforma universitaria en la segunda década del siglo XX” sostiene un informe del Ministerio de Educación nacional de 2018. Una conclusión se desprende: en educación no existe grieta alguna. De un lado y otro se defendió que estos formatos eran inclusivos, dirigidos a una población trabajadora, que contemplaba sus saberes previos y que esta nueva flexibilidad era deseable y académicamente justa. Más aún, que una población expulsada de la escuela común tiene las herramientas para organizarse y estudiar por su cuenta con la asistencia de tutores (virtualidad). Cuando la ministra porteña, [Soledad Acuña](#), intentó cerrar escuelas vespertinas con baja matrícula lo hizo aduciendo que otros formatos tienen tasas de titulación mayor.

Este es el punto de llegada de una enorme mutación que sufre la modalidad. Un cambio radical entre lo que supo ser y lo que es hoy. En efecto, la educación de adultos ocupa un lugar central en la agenda local e internacional hace décadas. En ese cuadro, desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, se produjo un viraje, o resignificación de la concepción que articula la modalidad. En primer término, se redefine el sujeto destinatario: de la educación de adultos a la de jóvenes y adultos. El nuevo nombre que define la modalidad -educación permanente para jóvenes y adultos, esto es EPJA- da cuenta de esa transformación. La categoría “permanente” también expresa la inclusión de una serie de cambios. Ahora, la formación ya no se piensa como una instancia remedial -el sujeto debe suplir una carencia de un proceso que no alcanzó en tiempo y forma- sino como algo que puede realizarse en cualquier momento: “a lo largo de toda la vida”. Un mecanismo que puede sonar muy progresista pero, en realidad, libera al Estado de su responsabilidad a la hora de explicar el analfabetismo, el analfabetismo funcional, la deserción educativa, entre otros. Estos cambios van acompañados de otros dos no menos importantes. La resignificación de la modalidad supuso, también, un cambio en el agente responsable de brindar educación: un viraje que nos lleva del Estado a los llamados “aliados estratégicos”. Así se denominan en la literatura internacional y, en nuestro país, se expresó como la consolidación de todo un sector de organizaciones sociales, civiles y privadas que aparecen como los principales “dadoras” de educación: el gran sector comunitario. A través de ese mecanismo, el Estado terceriza su función y la para-estataliza. Ese cambio va de la mano de la redefinición del contexto mismo en el que se desarrollan los procesos educativos: se pasa de la preocupación por garantizar las condiciones materiales para el acceso -dónde, cuántas y qué características deben tener las escuelas según las necesidades educativas a atender- a suponer que el individuo aislado es el responsable de generar sus propias condiciones para aprovechar los distintos circuitos educativos. De lo social a lo individual. Esos circuitos educativos pueden ser la casa de las personas, cualquiera sea su naturaleza (virtual), una parroquia, un comedor, una ONG (Fines 2/Trayectos) o bien, una escuela (CENS y bachilleratos para adultos). Todo este proceso de transformaciones tiene, además, un impacto en lo curricular: la formación deja lugar al desarrollo de habilidades que son diversas, particulares, vivenciales e, incluso, extracurriculares (proyectos adecuados, contextos problematizadores, experiencias vivenciales).

Pero ¿cuándo y cómo pasó esto? La escuela no está por fuera de la sociedad. No extraña que las primeras expresiones de estas ideas aparezcan entre mediados de los '70 y los '80, es decir, al calor de la derrota de la lucha de clases a nivel mundial, el auge del posmodernismo y la reacción. La idea que la tarea educativa es orientar en el “aprender a aprender” encarna fuerte en la educación de adultos, pero permea a todo el sistema y se profundiza en los '90 y fuertemente con el cambio de milenio. En esta última versión (de 2003 a nuestros días) se presentará en clave progre y emancipatoria lo que es su contrario: una enorme degradación.

En efecto, en esos años, se consolida un nuevo paradigma presentado en clave “emancipatoria”: ya no es el Estado quien debe garantizar que todas las niñas, niños y adultos empiecen y terminen la escuela, sino que son, los miembros de la sociedad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado quienes deben comprometerse a saldar aquello que el Estado no puede garantizar. Del fracaso de la escuela común a la tercerización educativa. Ahora el Estado debe crear nuevas formas y tipos de educación para que jóvenes y adultos aprovechen las oportunidades para formarse por fuera de las “instituciones tradicionales” y con planes de estudio menguados, adaptados, adecuados. Se habla de educación popular, emancipatoria, freiriana pero, en realidad, se despliega un enorme ataque educativo: resolver la crisis educativa no requiere una acción estatal sino que se terceriza y desplaza por fuera del Estado. El resultado de todo este proceso es que una educación más barata (la paraestatal) emerge al lado de la educación tradicional. La primera se sirve del “fracaso” de la segunda y la erosiona. Un círculo de retroalimentación se abre entre ambas y conecta la educación común, la de adultos y las nuevas formas de secundaria exprés (Fines 2/Trayectos o sus vectores virtuales: Adultos 2000 y Terminá la Secundaria). Se trata de una nueva interconexión que abarata el costo total del sistema educativo y permite, al mismo tiempo, brindar una apariencia de éxito escolar: la titulación crece al tiempo que se reducen los factores que mostraban fracaso educativo como deserción, repitencia y sobre-edad. Al calor de todos esos cambios se procesa también la crisis de la infraestructura escolar: el deterioro y hacinamiento de las escuelas se resuelve creando nuevos espacios educativos paraestatales para atender el crecimiento de la matrícula a partir del aumento de la obligatoriedad escolar. Revisar unos pocos números nos da la pauta de esta nueva relación. Veamos.

Desertores se buscan

Al 2021, la EPJA tenía en todo el país, en su secundaria para adultos 535.950 estudiantes y otros 158.919 en el nivel primario. La modalidad registra otros 503.419 estudiantes en formación profesional que tiene una dinámica distinta y debe ser considerada aparte. Limitémonos al nivel secundario para entender la nueva interconexión entre la secundaria común y la de adultos (y jóvenes). Si bien se argumenta que el número incluye a los cursantes del Plan Fines 2 (trayectos) a partir de 2018, esa cuenta en realidad es una cifra negra y desconocida: para 2017 la secundaria EPJA registraba 537.498 estudiantes y en ese mismo año, solo la provincia de Buenos Aires contabilizaba 135.200 estudiantes Fines 2 en el 1° cuatrimestre del año repartidos en 6.362 comisiones. Una conclusión se desprende: esos 535.950 son las y los estudiantes que concurren a alguno de los CENS o bachilleratos de adultos.

Su volumen es modesto, a poco de considerar algunas cifras. En principio, las escuelas para adultos se nutren centralmente con los desertores de la escuela secundaria común y solo absorben una pequeña parte de su posible universo educativo. Algo que queda muy claro a poco de analizar la tasa de egreso del nivel secundario común: 54,1%. Lo que implica que, sobre un total de 100 estudiantes, 46 no egresan. Ese número tal vez explique la composición etaria de la EPJA donde casi el 73% de sus estudiantes tienen menos de 29 años (unos 389.292 estudiantes en todo el país). Estudiantes que llegan con repitencia y trayectorias escolares de “baja intensidad” (múltiples ingresos y salidas de la escuela común). Se habla de asociar la EPJA con la formación profesional, con el mundo productivo y, sin embargo, el grueso de la matrícula estudia en la orientación ciencias sociales (418.714 sobre la matrícula total). Un claro ejemplo del desfasaje entre dichos y hechos.

El contraste es mayor si lo comparamos con su potencial: toda la población que podría incorporar y no lo hace. Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares nos permiten aproximarnos al universo que la EPJA no cubre. Al primer semestre de 2020, nuestro país tenía 549.813 personas de entre 25 y 29 años con secundario incompleto como máximo nivel educativo. Un número que se multiplica por más de diez si sumamos al resto de la población: tenemos 4.277.443 personas de entre 30 y 64 años con secundario incompleto y otras 1.945.776 entre los mayores de 65. Solo los que tenían entre 25 y 29 alcanzaban el mismo volumen que toda la secundaria de adultos incorporada al sistema.

Un segundo problema, solidario con el anterior, es el volumen de estudiantes de entre 18 y 24 años que no terminaron el secundario y no lo cursan. Las reconstrucciones de cohortes permiten medirlo y así lo hemos analizado en *Brutos y Baratos* para los menores de 18 años. Pero hay más. En los 31 aglomerados urbanos la Encuesta Permanente de Hogares registra 3.211.024 personas de entre 18 y 24 años, casi la mitad no asistían a ningún establecimiento educativo: una suma de 1.598.351 jóvenes. De estos, el 3,7% (59.191 personas) tenía incompleta la primaria; otro 8% (127.390 personas) alcanzó a completar la primaria y un 32,3% (esto eran 516.984 jóvenes) no habían terminado la secundaria. Es decir, 44 de cada 100 jóvenes que viven en aglomerados urbanos tienen el secundario incompleto. Así, con integrar a esos que tienen menos de 29 años la EPJA triplicaría rápidamente su matrícula. Ya ni hablemos si sumaran a todos esos que no cursaron el nivel secundario y para los que se supone que se dirigen las ofertas creadas por el artículo 135° de la Ley de Educación Nacional: Fines 2, Adultos 2000, Terminá la secundaria. La verdadera esencia de estas propuestas es brindar un formato para la terminalidad, barato y rápido, para una parte de las chicas y chicos obreros expulsados de la secundaria común. Porque para incorporar a esos millones que están fuera de la escuela, la UNESCO en 1972 -todavía antes de la derrota mundial de la clase obrera- reconocía cuál era la fórmula: “las licencias para estudios con sueldo, los días libres y la seguridad de empleo durante las licencias para estudios deben garantizarse mediante una legislación apropiada. Los trabajadores desempleados tendrán derecho a recibir formación profesional y a percibir una remuneración durante esa formación”.¹² Allí está la base material que explica esos números y también las respuestas que da una burguesía a la que le sobra la mitad de su país.

Su verdadero rostro

La EPJA es hoy un formato desfigurado que oculta su verdadero lugar: garantizar una mayor titulación para amplias filas obreras que ven en esta oferta una forma más rápida para terminar la escuela secundaria. Con una matrícula de poco más de medio millón de estudiantes y sin contar los formatos acelerados, bajo el formato EPJA egresan 87.506 estudiantes en todo el país por año, mientras que, con más de cuatro millones de estudiantes, la secundaria común titula a poco más de cuatrocientos mil (402.685). No extraña, entonces, que se presione por una mayor flexibilización a la modalidad y que la [dinámica de la escuela secundaria común](#) tienda a “copiar” las innovaciones de la EPJA. Hoy tanto CABA como la provincia de Buenos Aires fomentan la introducción de formatos de semipresencialidad o a distancia, una reforma del currículum que postula la enseñanza de “núcleos conceptuales”, el trabajo mediante “situaciones problemáticas”, “proyectos de acción” y las “capacidades específicas” de cada estudiante. Diseños curriculares modulares, acreditaciones parciales y foco en las capacidades se encuentran a la orden del día. Ninguna de las ofertas apunta a incorporar a esos millones fuera de la escuela. Ya lo sabemos, hacen falta recursos (licencias pagas y construcción de escuelas, por ejemplo) para acercarlos. Apenas titular a unos pocos más. Ahí se encuentra el verdadero rostro de la EPJA en todas sus variantes: ser el reservorio para el descarte de la escuela común. Y, sin embargo, es posible construir otro destino para la escuela. Para eso hace falta otro sujeto (la clase obrera) y un programa que construya hoy el país que queremos en treinta años: una [vía socialista](#) que de lugar a la [Argentina del 2050](#).

El último discurso y el derecho a la resurrección

Salvador Allende (1908-1973)

A continuación, presentamos las últimas palabras públicas de Salvador Allende, ante los trabajadores, llamando al combate final y entregando su vida para constituirse en un ejemplo moral para los revolucionarios del futuro.

Seguramente, ésta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para quienes han traicionado el juramento que hicieron: soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al Gobierno, también se ha autodenominado Director General de Carabineros. Ante estos hechos sólo me cabe decir a los trabajadores: ¡No voy a renunciar!

Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.

Trabajadores de mi patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra de que aceptaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección: el capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara el Schneider y reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena, reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios.

Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días siguieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a unos pocos.

Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente; en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las líneas férreas, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos, frente al silencio de quienes tenían la obligación de pro[inaudible].

Estaban comprometidos. La historia los juzgará.

Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. La seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal [inaudible] los trabajadores.

El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.

Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigán ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.

¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!

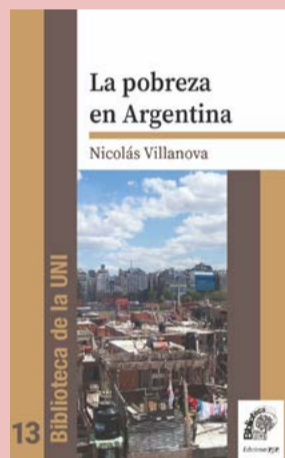
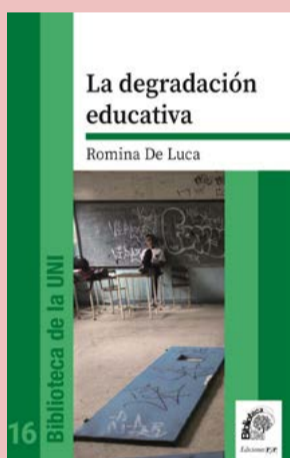
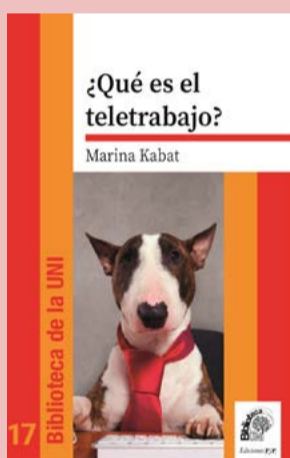
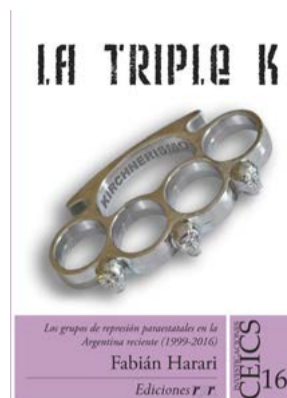
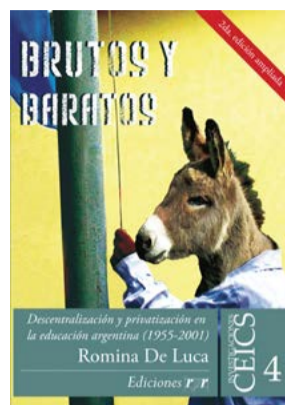
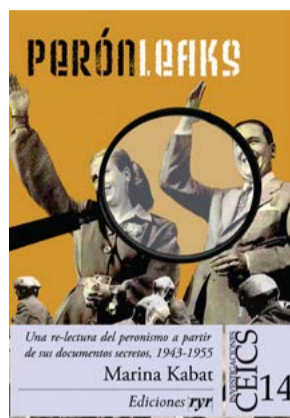
Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.

Ediciones ryr

Accedé al catálogo completo:

<https://edicionesryr.com.ar/catalogo/>

INVESTIGACIONES CEICS



**Descargá
el libro
con el
programa
de Vía
Socialista**

[https://viasocialista.com.ar/
category/argentina-2050/?-
fbclid=IwAR2FelKZ0u-
V0Db34x8uSkMO4SsT-
L9oUkUNmrjXSAWDz-
TKXTneIoOeK8UQIc](https://viasocialista.com.ar/category/argentina-2050/?fbclid=IwAR2FelKZ0u-V0Db34x8uSkMO4SsT-L9oUkUNmrjXSAWDz-TKXTneIoOeK8UQIc)



Una Vía Socialista posible

Eduardo Sartelli

Ediciones ryr

**Seguinos
en redes**

 [Vía Socialista](#)

 [@viasocialista](#)

 [@viasocialistaarg](#)

 [/VíaSocialista](#)